



Capítulo 10

El neoliberalismo en democracia (1983-2002)

1

10.1 El alfonsinismo (1983-1989)

Luego de la Guerra de Malvinas, la dictadura militar comenzó a transitar el principio del fin. El reemplazo de Galtieri por Reynaldo Bignone abrió paso a una nueva etapa: el retorno democrático. El gobierno de facto convocó a elecciones para el día 30 de octubre de 1983.

Durante la campaña, Raúl Alfonsín –candidato de la Unión Cívica Radical- tomó como bandera el preámbulo de la Constitución Nacional y la defensa de los valores democráticos. Prometió enjuiciar a los responsables del terrorismo de estado y reactivar la economía argentina poniendo énfasis en la reconstrucción del aparato productivo. Con respecto a la deuda externa, propuso diferenciar la deuda legítima de la ilegítima y sólo pagar la primera. También intentó vincular a parte del peronismo con la cúpula militar denunciando la existencia de un pacto realizado entre la esta última con algunos sectores del sindicalismo.

La sociedad argentina receptionó el discurso radical y Raúl Alfonsín, el 30 de octubre de 1983, se convirtió en el primer presidente en derrotar en las urnas al peronismo con el 51,7 % de los votos frente al 40,1% del justicialismo. Para el peronismo, la primera elección tras la muerte del Juan Perón y la brutal dictadura, fue una dura derrota que derivó en una renovación de muchos de sus cuadros dirigenciales.

Aquellos meses en los que se transitó el retorno democrático significó una masiva participación popular -



especialmente, de los más jóvenes- en diversos espacios de militancia. Aún se recuerdan en la memoria colectiva los actos de campaña multitudinarios en la Avenida 9 de Julio de la Capital Federal, y el clima de libertad también dado en las artes y la cultura. La dictadura cívico militar había perseguido a músicos y artistas populares censurando sus obras y prohibiendo gran cantidad de obras. Dos hechos de aquel momento simbolizan el clima cultural de la época: el regreso de Mercedes Sosa a los escenarios en 1982 y la visita de Silvio Rodríguez en 1984, recital en el cual también participaron Víctor Heredia –que había sufrido la desaparición de su hermana-, León Gieco y Piero. Se produjo una renovación en diferentes géneros musicales, en el rock, pero también en el folclore en la cual participaron Peteco Carabajal, Liliana Herrero, Raúl Carnota y Manolo Juárez. La política y el arte volvían a encontrarse, el nuevo aire de libertad despertaba esperanzas en el conjunto del pueblo argentino.

Un balance general de este período incluye la recuperación de la democracia, las libertades civiles, el juicio a las Juntas militares de la dictadura. una política exterior autónoma con un perfil más latinoamericano, y una primera etapa que intentó en lo económico, una política de desarrollo, a la que se denominó como Primavera Alfonsinista. Sin embargo, el problema de la deuda externa creciente y heredada, la fuga de capitales, las corridas cambiarias, la suba descontrolada de precios, la actuación de los grandes grupos económicos, terminaron por desestabilizar al gobierno y hundieron al país en una grave crisis social.

10.1.1 Los derechos humanos después de la dictadura

Con el inicio de su mandato, el Presidente Raúl Alfonsín impulsó un histórico juicio a los responsables del terrorismo de estado, para lo cual, primero, anuló la ley de autoamnistía dictada por



la dictadura. En principio, instruyó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas la investigación y sanción de los delitos cometidos, pero ante las demoras excesivas e injustificadas del tribunal militar, el 4 de octubre de 1984 la Cámara Nacional de Apelaciones continuó el proceso -la Causa nro. 13- y llevó a cabo el juicio.

El Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), con más de cincuenta mil folios creada por Raúl Alfonsín, fue presentado en 1985 y dio cuenta, al menos, la desaparición de "cerca de nueve mil personas", y sirvió de base a la acusación jurídica. Los acusados fueron los integrantes de las tres primeras juntas militares: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti (Comandantes en Jefe del Ejército, la Marina y de la Fuerza Aérea, respectivamente, de la primera junta militar entre 1976 y 1980). También, los jefes militares Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, que integraron la segunda y tercera junta hasta 1982. Durante el juicio, en la sala de la Cámara, quedó acreditada la realización de secuestros, torturas, saqueos, detenciones clandestinas e ilegales, y crímenes. Las audiencias orales fueron entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985, con la declaración de 833 personas, entre ellos ex detenidos desaparecidos, familiares de las víctimas y los mismos represores. La sentencia fue dictada el 9 de diciembre de 1985, con base en 709 casos ventilados en el juicio, y condenó a Videla y Massera a reclusión perpetua; a Agosti a cuatro años y seis meses de prisión; a Viola a diecisiete años de prisión; y a Lambruschini a la pena de ocho años de prisión. A su vez, Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron absueltos.

El juicio y condena a los integrantes de las Juntas fue un hito histórico para los argentinos. Aunque luego, con base en la "teoría de los dos demonios" y los tres niveles de responsabilidad, se cerraron los juicios al resto de los militares responsables con las leyes de Punto Final en 1986 -cese de la persecución penal- y de



Obediencia Debida en 1987 -exculpación de los oficiales inferiores--, en medio de presiones y planteos de los sectores castrenses. La teoría de los dos demonios era una lectura de lo ocurrido, por la cual se equiparaba las responsabilidades entre quienes practicaron el terrorismo de estado y quienes eran parte de los grupos guerrilleros. Mientras que, con una tesis ya sostenida en la campaña electoral en 1983, el gobierno propuso diferenciar los niveles de responsabilidad jurídica de los militares en los crímenes de la dictadura: quienes dieron las órdenes, quienes la cumplieron y quienes las excedieron. Pese a esto, el gobierno de Alfonsín entendió que gran parte de la tarea había sido realizada, de acuerdo a sus objetivos de averiguar la verdad y sancionar a los altos mandos, en su condición de principales responsables.

Los levantamientos armados, liderados por un grupo de las fuerzas armadas llamados “Carapintadas”, liderados por oficiales como Aldo Rico, Seineldín, Barreiro, entre otros - en 1987 y 1988- presionaron fuertemente por el fin de los juicios. El primer levantamiento, el de semana santa de 1987, generó una gran movilización popular a la Plaza de Mayo en defensa de la democracia, donde Alfonsín, tras haber ido a Campo de Mayo -foco de la insurrección-, dio un discurso acompañado de los principales dirigentes de la oposición política y del sindicalismo. De allí se registró la conocida frase: “La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina”.

A partir de 1983 comenzaron a conocerse en forma pública las atrocidades realizadas por las Fuerzas Armadas. La sociedad en su conjunto condenó a los responsables directos. Sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo para aceptar, reconocer y denunciar que parte de la sociedad civil había sido cómplice: parte de la cúpula eclesiástica, del empresariado, algunos integrantes del poder judicial y los medios de comunicación también tenían responsabilidad en lo ocurrido. Parte del campo vinculado a los partidos políticos tampoco se había involucrado en la denuncia de lo que ocurría. El Partido



Socialista ofreció a sus dirigentes para ocupar cargos en el cuerpo de diplomáticos, tal es el caso de A. Ghioldi y W. Constanza. El Partido Radical y el Justicialista aportaron dirigentes para desenvolverse como intendentes u otros cargos del gobierno militar. El Partido Comunista –movido por el acercamiento de Martínez de Hoz con la URSS- rechazó las denuncias de las desapariciones. La cúpula de la Iglesia Católica contó obispos que apoyan el accionar de la dictadura, llegando inclusive a presenciar sesiones de tortura en los centros clandestinos de detención. De más de 80 integrantes del Episcopado sólo 4 denunciaron lo ocurrido, Enrique Angelleli (brutalmente asesinado), Jaime de Nevares, Miguel Hesayne y Jorge Novak. La Sociedad Rural Argentina por su parte, publicó una solicitada destacando los logros del gobierno y pidiéndole que continuara actuando con fe en el camino iniciado. El poder económico y las empresas transnacionales completan el cuadro de complicidades: las comisiones internas y los delegados fueron los blancos elegidos, tal como lo muestra lo ocurrido en la empresa Ford Motor Company convirtió su planta de General Pacheco en centro de operaciones de las acciones represivas clandestinas¹.

10.1.2 De la Primavera Alfonsinista a la crisis

El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia. Los primeros dos años del gobierno se vieron signados por la búsqueda de una política económica que no se ajustara a la ortodoxia neoliberal. Con este horizonte, fue designado como Ministro de Economía un hombre de la pequeña y mediana industria, Bernardo Grinspun, quien propuso aplicar una política de control al capital financiero, impulsar el mercado interno y proteger los intereses nacionales. También promovió la formación de un “club de

¹ Véase Andersen, Martín (1993): *Dossier secreto. El mito de la guerra sucia*. Buenos Aires: Editorial Planeta.



deudores” latinoamericanos para alcanzar mejores condiciones frente a la renegociación de las condiciones de pago de la deuda externa².

El programa propuesto no logró reunir el apoyo social necesario para enfrentar a aquellos sectores que verían sus intereses perjudicados. Uno de los principales enfrentamientos se produjo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con quien Alfonsín estableció discusiones públicas luego de anunciar la decisión de establecer una moratoria por el término de seis meses con el objeto de estudiar a partir de la conformación de una comisión parlamentaria la naturaleza de la deuda y determinar su carácter legítimo o no. Pero la oligarquía financiera interna articulada con el poder financiero transnacional -consolidado por la política económica aplicada en 1976- presionaron fuertemente para que Alfonsín desplace al ministro y a su plan mercado internista. El programa económico viró: se anunciaba entonces, que la prioridad sería impulsar las inversiones privadas, aumentar las exportaciones y el achicamiento de los gastos del estado. Para ejecutar las nuevas directivas, asumió en esta cartera Juan Vital Sourrouille.

En 1985, el Plan Austral –reemplazo del peso por una nueva moneda, el austral- marcó el fin de la iniciativa heterodoxa. Las nuevas directivas incluyeron la apertura económica, la privatización periférica, el ajuste en perjuicio de los trabajadores siguiendo las directivas del FMI y la aplicación del Plan Houston para fomentar inversiones extranjeras en petróleo.

El gobierno, fuertemente condicionado por la clase dominante que se había fortalecido con el proceso económico llevado adelante por la dictadura cívico-militar, tuvo que enfrentar una grave situación económica que intentó ser encauzada por el Plan Primavera (1988) destinado a combatir la inflación. Dicho Plan, generó un aumento de las importaciones que terminaron dando el

² Véase Restivo, Néstor y Rovelli, Horacio (2011): *El accidente Grinspun, un ministro desobediente*. Buenos Aires: Capital Intelectual.



golpe de gracia a la producción local, puesta en jaque desde la época de Martínez de Hoz.

Durante el gobierno de Alfonsín se gestó un amplio frente de oposición protagonizado por un grupo de diputados justicialistas y particularmente por la CGT, conducida por Saúl Ubaldini. Con 14 paros generales resistió los intentos de privatización de las empresas públicas y la aplicación del modelo neoliberal. Luego del protagonismo de un amplio sector del sindicalismo en la caída de la dictadura, la CGT se reunificó bajo la conducción que del sector más combativo liderado por Ubaldini. Frente a las políticas de ajuste, la CGT convocó a un paro general con movilización para el 29 de agosto de 1985, presentando un Programa de 26 puntos que comprendía una propuesta integral en torno a las cuestiones económicas, políticas y sociales. Este programa proponía: declarar la ilegitimidad de la deuda externa; otorgar créditos hacia las actividades productivas; sancionar una nueva ley de entidades financieras; nacionalizar los depósitos bancarios; desarrollar las empresas estructurales del estado; explotar riquezas naturales e impulsar el desarrollo tecnológico; y la participación de los trabajadores en la conducción y gestión de las empresas estatales.

Durante esta etapa, otro factor que enfrentó al Movimiento Obrero con el gobierno de Alfonsín, fue el impulso de la Ley Mucci, que promovía la participación de las minorías en las conducciones gremiales (con un 25% de votos), el llamado a elecciones internas supervisadas por el poder judicial y la restricción en la utilización de los fondos sindicales. La lucha de la CGT frenó la sanción de la Ley.

En materia de política exterior, Junto a la iniciativa del club de deudores -denominada el Consenso de Cartagena- el gobierno de Alfonsín impulsó también, a nivel regional, el grupo de Contadora con el objetivo de llevar la paz a Centroamérica donde Estados Unidos operaba fuertemente a favor de los contra nicaragüenses para desestabilizar al sandinismo. Además, se destacó especialmente el acercamiento estratégico con Brasil, con cuyo presidente José



Sarney realizó acuerdos que fueron las bases del MERCOSUR; por otro lado, llegó a un acuerdo de paz con Chile por el conflicto del Canal del Beagle y tuvo un acercamiento con Cuba.

En el terreno militar otro suceso debilitó aún más al gobierno. En enero de 1989 un grupo de jóvenes militantes del Movimiento Todos por la Patria tomaron el cuartel militar del Tercer Regimiento de Infantería Mecanizada de La Tablada, en la provincia de Buenos Aires. El grupo afirmó -tiempo después- que había recibido información certera indicando que en dicho cuartel se produciría un intento de golpe de estado liderado por los carapintadas. Dejó un saldo de más de 30 muertos y la condena a los sobrevivientes de la toma. Durante el operativo de represión se produjeron violaciones a los derechos humanos, por el cual se responsabilizó al Estado argentino en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En 2019, un tribunal oral condenó al jefe militar Alfredo Arrillaga por ser responsable de -entre otros delitos- de la desaparición de José Díaz e Iván Ruiz. Arrillaga también fue condenado por participar en centros de detención ilegal en Mar del Plata y en hechos represivos como la Noche de las Corbatas³.

Otro factor que debilitó al gobierno fue la campaña crítica de los medios de comunicación. Desde el momento en el cual Alfonsín promovió una nueva Ley de Radiodifusión, se convirtió en el blanco del poder concentrado mediático que, al igual que el poder financiero, se habían fortalecido durante la última dictadura cívico-militar⁴.

³ Véase Roesler, Pablo. “Juicio por La Tablada: perpetua para el represor Arrillaga por la desaparición de un militante del MTP”, en Tiempo Argentina, 12 de abril de 2019. Disponible en: <https://www.tiempoar.com.ar/nota/condenan-a-prision-perpetua-a-arrillaga-por-la-desaparicion-de-un-militante-del-mtp-en-la-tablada> [Recuperado el 03-05-2019].

⁴ Leopoldo Moreau, por aquel entonces diputado nacional y hombre de confianza de Alfonsín, recuerda las amenazas que recibió en relación a esta iniciativa. Relata: "...tuvimos que librar una batalla dura. Yo era presidente de la comisión de comunicaciones y en el año 86, creo, un día recibí un llamado de Mignetto que me invitó a tomar un café. Y me planeó que había que derogar el artículo 45 de radiodifusión. Porque ellos en ese momento estaban queriendo hacerse de radio mitre, y abrir el proceso de concentración de medios, y ese artículo lo prohibía. Yo



En los meses siguientes se produjo una fuerte devaluación del austral y la inflación (que desembocó en hiperinflación) se tornó incontrolable. Los grupos económicos concentrados apostaron a debilitar al gobierno negándose a vender dólares, dando un verdadero golpe financiero. En este marco de inestabilidad se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, el 14 de mayo, donde resultó electo Carlos Saúl Menem, quien había vencido en las internas del PJ al histórico dirigente Antonio Cafiero. La situación social por su parte, resultó incontenible. El Plan Alimentario Nacional -la caja PAN como era conocido popularmente- ni las ollas populares alcanzaron a paliar el hambre. El país se ve sacudido por una ola de saqueos a supermercados que luego de una feroz represión dejó un saldo de 14 muertes. Alfonsín no pudo terminar su mandato y tuvo que presentar su renuncia antes de la fecha estipulada.

10.1.3 Fin de la experiencia alfonsinista

A modo de conclusión, señalamos que la derrota electoral de septiembre de 1987, en donde la UCR perdió a manos de la oposición gobernaciones y bancas legislativas, fue una señal del agotamiento del gobierno. La política de confrontación con el

lo hable con Alfonsín y nosotros nos mantuvimos firmes en no derogar el artículo 45. En el año 88 (habíamos perdido la elección parlamentaria del 87) nosotros presentamos un proyecto de radiodifusión el 3 de marzo del 88, que era mucho más restrictivo que éste. Éste establece un tope de 24 licencias, el nuestro establecía un tope de 4 licencias. Y no lo pudimos sancionar porque pierde Cafiero la interna frente a Menem, y ya el Grupo tenía un compromiso de Menem ¿Qué hacen? Nos impiden sancionar la ley. Nosotros mantenemos el art. 45 hasta el día en que se va Alfonsín, y esa es una de las razones por las cuales Magonetto le dice en la cara a Alfonsín, cuando Alfonsín pide apoyo para terminar el mandato porque faltaban seis meses: "No, el obstáculo es usted", empujando esta salida. Y apenas el menemismo se hace del gobierno, con la ley de reforma del estado deroga, en una ley omnibus, el artículo 45 y ahí abre el camino a este fenomenal proceso de concentración que termina con doscientos y pico de licencias en mano de un grupo..." Declaraciones de Moreau en CN 23. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ddODHAzUI8I&feature=youtu.be> [Recuperado el 03-05-2019].



movimiento obrero organizado, le privó la posibilidad de acercarse a una base social que, por otro lado, siempre fue, mayoritariamente, proclive al peronismo. La caída llegó con un golpe económico promovido por los sectores económicos concentrados del país con los que, justamente, el propio Alfonsín había venido negociando en un contexto de tensión, como lo evidencia el día que fue silbado durante un discurso dado en la Sociedad Rural en 1988, o el hecho que su ministro de economía, Juan Carlos Pugliese, se quejó resignado diciendo que “a los empresarios les había hablado con el corazón y contestado con el bolsillo”.

En 1988, el país entró en cesación de pagos de la deuda externa en el medio de una gran crisis fiscal, falta de perspectivas de crecimiento y de reservas monetarias y con la perspectiva del fin de ciclo alfonsinista. El 6 de febrero de 1989, el gobierno desreguló el mercado cambiario que abrió con una corrida que, en poco tiempo, tornaría caótica la situación económica y precipitaba dramáticamente, el final. Éste se dio en medio de una hiperinflación trágica para los sectores más débiles de la sociedad, los comercios y la pequeña y mediana industria, y los saqueos a supermercados y almacenes. La deuda externa, una novedad para la democracia y un gran condicionante, creció de 43 mil millones de dólares en 1983 a casi 65 mil millones en 1989. La desocupación creció de 4,6 a 7,7%, el PBI registró caídas del -1,1 y -4,7 en 1988 y 1989 respectivamente. La inflación jaqueó permanentemente al gobierno, como en 1985 que con más de 600% provocó la renuncia de Grinspun; pero, en 1989, la hiper golpeó duramente: del 9,6% mensual subió a 78,4% en mayo, a 114,5% en junio, y 196,6% en julio5.

Los candidatos presidenciales para 1989 eran Eduardo Angeloz por el oficialismo una figura del liberalismo conservador, y

5Rapoport, Mario. *Aportes de Economía Política en el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Una revisión histórica de la inflación argentina y de sus causas*. Disponible en www.mariorapoport.com.ar [Recuperado el 3-3-2020].



Carlos Menem, quien ostentaba un aspecto de caudillo federal del siglo XIX, prometía una revolución productiva, salarizado y acercamiento a los países no alineados, lo que aparentaba el regreso de políticas nacionalistas y populares. Alfonsín, sin apoyo, desmoralizado, le entregó antes de tiempo la banda presidencial a Carlos Menem, quien, el 14 de mayo, había triunfado por 47,51% a 37,10% con 312 electores de los 600 del, por entonces vigente, Colegio Electoral. Para fin de aquél año, nada quedaba de aquella esperanza colectiva inicial y una gran sombra de incertidumbre cubría el horizonte. Tal vez la insuficiencia ideológica para comprender las tareas históricas a realizar fue lo que llevó a Alfonsín a ser conciliador con sus enemigos -el capital concentrado y los acreedores externos- y excesivamente duro con quienes, no obstante profesar otras identidades políticas, eran de quienes podía esperar colaboración.

Se había logrado instaurar un modelo democrático en nuestro país, tras los años de la sangrienta dictadura cívico militar, pero, también empezaba a evidenciarse la insuficiencia para el desarrollo del país, si no se avanzaba al mismo tiempo en la independencia económica y la justicia social, las banderas históricas del movimiento nacional. Pero el camino de la crisis social recién empezaba.

Los años noventa fueron la segunda década infame para los argentinos. El gobierno de Menem fue el de la defeción: hizo lo contrario de sus promesas de campaña. La explicación a ello puede encontrarse en dos cuestiones que, si no son suficientes, sí al menos son insoslayables: primero, la ofensiva económica brutal del '89 de las corporaciones económicas que encontraron en la "híper" y sus efectos devastadores en las relaciones sociales, una nueva forma de disciplinamiento social. Y segundo, el orden mundial se disponía a subordinarse a la hegemonía unilateral de los Estados Unidos, tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la imposición de las reglas del capitalismo financiero y el libre comercio



global. Las transformaciones fueron de enorme trascendencia: el orden mundial instaurado en la posguerra a partir de 1945 se disolvía. Así, el país se incorporaría al concierto internacional dispuesto por el Consenso de Washington, como el más obediente alumno del neoliberalismo imperialista.

12

10.2 Menemismo y delaurrismo (1989-2001)

Hasta 1989 el peronismo había constituido un impedimento para la profundización de las políticas neoliberales. Pero en aquel convulsionado año para el mundo y también para nuestro país, la historia cambia su rumbo.

Fue el propio justicialismo el que llevó a cabo la reconversión económica y la reforma del Estado tan demandada por el nuevo bloque hegemónico conformado en 1976 y por los Estados Unidos quien emergía luego de la Guerra Fría como la potencia hegemónica del nuevo orden unipolar.

Durante la década del '90 se profundizaron en toda América Latina y el Caribe la política neoliberal aplicadas en los años '70. Las mismas, tuvieron consecuencias sociales, económicas y políticas negativas para los pueblos de la región. En términos generales, reestructuraron el sistema productivo provocando una redistribución regresiva del ingreso y la renta nacional.

Estados Unidos e Inglaterra fueron los pioneros en la aplicación de las reformas neoliberales. En Estados Unidos ocurrió bajo la gestión de Ronald Reagan (1981-1989) -continuada y profundizada por G. Bush- que llevó adelante importantes rebajas fiscales a favor de las empresas de rentas más elevadas, recortes en los salarios y del gasto público referido a la asistencia social. Se realizó, además, una fuerte apelación al sentimiento individualista y nativista de la sociedad norteamericana, exacerbando el odio hacia el comunismo, tendiente a legitimar la política exterior que reavivaría el



enfrentamiento con la URSS. Pero el ajuste no se llevó adelante en todos los ámbitos de la estructura estatal, mientras se achicaba el “gasto” social, aumentó notablemente el gasto militar, necesario para sostener las numerosas intervenciones de los EEUU en los conflictos internacionales de la época, tales como la invasión a Granada, la asistencia a la guerrilla antisandinistas (los “contras”), la ayuda económica a Jordania, Arabia Saudita y Kuwait y el apoyo a Israel.

Estados Unidos buscó retomar el control político y geográfico de las zonas en donde evaluaban que habían sido perdidas por la administración Carter. En un documento elaborado por las autoridades norteamericanas denominado “Documento de Santa Fe”⁶ se refirió al enfrentamiento con la URSS como la “Tercera Guerra Mundial” y a los países periféricos como “escenario” de la misma. En este marco, se construyó el concepto de “Guerra de Baja Intensidad” (GBI), es decir, conflictos armados pero sin la existencia de una declaración abierta de guerra⁷.

Por su parte, Europa también adoptó la aplicación de medidas neoliberales. Margaret Thatcher (1979-1990) en Inglaterra abandonó las políticas keynesianas adoptando una política monetarista orientada a reducir la inflación y el déficit fiscal. Al igual que la política exterior norteamericana, impulsó el fortalecimiento de un nacionalismo expansionista basándose en los valores tradicionales victorianos.

El recrudecimiento del enfrentamiento entre el bloque capitalista y el bloque socialista fue conocido como “la segunda guerra fría”. El fin del período de coexistencia pacífica abrió una

⁶ Véase Calloni, Stella; Ducrot, Víctor Hugo (2004): *Recolonización o independencia. América Latina en el siglo XXI*. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.

⁷ En 1988, el Documento de Santa Fe II enunciaba como posibles argumentos para justificar la intervención la lucha contra el narcotráfico. Además de la intervención militar, bajo la categoría “cooperación internacional” se habilitan nuevas formas de injerencia.



nueva fase de militarización. Nuevamente en los Estados Unidos, los derechos civiles fueron cercenados, el neoconservadurismo ganó posiciones y la persecución ideológica creció en el campo educativo y artístico.

Por su parte, en la URSS Mijail Gorbachov (1989-1991) llevó adelante un conjunto de medidas –estructuradas a partir del Glasnot y la Perestroika- que terminaron con la disolución del bloque comunista y la simbólica caída del Muro de Berlín (1989). La experiencia del socialismo real había terminado. A partir de allí, Estados Unidos se autoproclamó potencia triunfadora y al capitalismo como el único sistema posible. El discurso triunfalista de la burguesía trasnacional se extendió –mediante la red masiva de medios de comunicación- a todas las regiones del mundo. La “nueva era globalizada” y el neoliberalismo fueron presentado por el poder financiero mundial como una realidad inevitable.

Desde la potencia del norte se realizaron un conjunto de recomendaciones realizadas por John Williamson conocidas como el “Consenso de Washington” y que se constituyeron en la política oficial de Estados Unidos para América Latina. Fue presentado como el único camino para superar la crisis de los años ochenta. El recetario incluía: ajuste estructural para mejorar la competitividad; estabilización macroeconómica; desprotección a través de liberalización comercial, financiera y la inversión extranjera; desestatización mediante la privatización de empresas públicas y reducción del gasto público. Se sostenía que estas medidas estructurales generarían el ámbito propicio para la generación de nuevas formas de acumulación de capital que ofrecerían la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías y a las ventajas de la reciente “globalización financiera”.

El disciplinamiento que supuso la represión militar en los años ´70 allanó el camino para que sea durante la década de los ´90 y bajo gobiernos democráticos se implantara el neoliberalismo en su forma más extrema. Ahora sí el recetario del Consenso de



Washington se constituye en el programa de gobierno de todos los países de la región: Sánchez de Lozada en Bolivia, Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Fernando Collor de Melo y Enrique Cardoso en Brasil, Sixto Ballén en Ecuador, Lacalle en Uruguay, Salinas de Gortari en México, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera en Venezuela.

En la Argentina Menem -y parte del peronismo- interpretó que efectivamente el contexto internacional demandaba el cambio de rumbo, aun si esto implicaba el alejamiento de los principios fundantes del justicialismo. El contexto internacional fue sin dudas, uno de los elementos que permiten comprender el viraje del histórico movimiento popular.

Norberto Galasso ofrece otra clave para reflexionar sobre este fenómeno: los cambios acontecidos desde 1976 en uno de los sectores sociales que históricamente integró al movimiento policlasista: la burguesía mercadointernista se había trasnacionalizado y bajó un complejo sistema de alianza había logrado que el Partido actuara a su servicio. Desde sus orígenes se había caracterizado por ser un frente policlasista donde confluían diferentes sectores sociales. Durante la etapa 1945-1976 la búsqueda del desarrollo de un capitalismo autónomo y el fortalecimiento del mercado interno había sido un punto central en la articulación dentro del movimiento. Sin embargo, parte de la burguesía nacida al calor del primer peronismo, había sufrido cambios materiales, consecuencia de las transformaciones del capitalismo a nivel mundial. En la búsqueda constante de aumento de ganancias buscaron adaptarse a los “nuevos tiempos globalizados” y tejieron una alianza con el capital extranjero. La composición de la clase dominante en la Argentina, había comenzado a cambiar. Galasso sostiene al respecto: “una de las cuestiones fundamentales que había pasado durante la dictadura genocida, fue la aparición de un grupo muy importante de empresarios, grandes consorcios que prácticamente llegaron a tener



tanto poder como la vieja oligarquía rural”⁸, proceso que no pasó desapercibido para el diario La Nación donde en una editorial de los años ´80 reflexionó: “se está verificando la concentración económica en varios consorcios poderosos que no pertenecen al viejo establishment”⁹.

16

Un caso paradigmático es la familia Macri, quien en los inicios del menemismo narró cómo se conforma un grupo de empresarios que le presentan un programa económico al Presidente electo, que incluía la propuesta de nombrar como Ministro de Economía a Miguel Roig, aceptado por Carlos Menem¹⁰. Se produjo entonces, una articulación de la burguesía nacional con la transnacional industrial y financiera, confirmando un nuevo bloque hegemónico que controló la dirección del Estado. Entre ellos se encontraban Franco Macri, Amalia Fortabat, Guillermo Khul, los representantes del grupo Bunge y Bor, Techint, Pérez Compac. La actividad financiera se convirtió en una nueva vertiente de sus negocios: Pérez Compac invirtió en el Banco Río, Macri en el Banco de Italia, Bulgheroni en el Banco del Interior, entre otros.

Como tercer factor, se encuentra el disciplinamiento social que generó la hiperinflación que provocó la renuncia de Alfonsín, allanó el camino para la implementación de políticas recesivas y de la convertibilidad que aseguraban el control de la inflación.

En cuarto lugar, cabe señalar la importancia y el rol que cumplieron los medios de comunicación que colaboraron en el fortalecimiento de ideas tales como “todo lo estatal es ineficiente”, “achicar el estado es agrandar la nación”, etc. Comunicadores, tales como Bernardo Neustad en la Argentina, dedicaban sus programaciones a realizar una crítica al “estatismo desmedido”.

⁸ Galasso, Norberto (2011): *Historia de la Argentina*. Buenos Aires: Ediciones Colihue, página 110.

⁹ Galasso: op. cit. página 110.

¹⁰ Macri, Franco. (1997): *Mari por Macri*. Buenos Aires: Emecé, página 199.



Una vez en el gobierno, los lemas de la campaña -el “salariazó” y la “revolución productiva”- quedaron pronto en el olvido. Apenas asumió el gobierno Carlos Menem impulsó una política contraria a la doctrina peronista.

Los ministros de la economía comenzaron a ser elegidos por el bloque económico concentrado, que los iba reemplazando según sus necesidades. Roig, Rapanelli, Erman González y finalmente, en 1991, Domingo Cavallo circularon por esta cartera: ajuste estructural, deuda externa, privatizaciones, apertura económica y ajuste fiscal, fueron los ejes de la nueva política que buscó el equilibrio macroeconómico. Para esto, se sancionaron un conjunto de leyes que habilitaron el desguace del Estado: se destacaron la “Ley de Reforma del Estado”¹¹ (agosto de 1989) y la “Ley de Emergencia Económica”¹² (septiembre de 1989).

El Plan de la Convertibilidad se estableció finalmente en abril de 1991. Mediante esta Ley, se estableció un tipo de cambio fijo: un peso argentino equivalía a un dólar estadounidense. Esta política se complementó con la apertura comercial tendiente a favorecer la importación de manufacturas con el objetivo de mejorar la competitividad de la industria nacional. Pero, la avalancha de productos extranjeros lejos de impulsar la modernización del aparato productivo argentino, produjo el cierre masivo de fábricas completando la tarea de destrucción de la industria nacional que había comenzado la política económica llevada adelante por Martínez de Hoz durante la última dictadura cívico-militar.

Por otro lado, se aplicó un amplio plan de privatizaciones de empresas públicas: ferrocarriles, petróleo, aviación, subterráneos, telefonías, agua, electricidad y gas, fueron algunas de las áreas

¹¹ Para acceder al texto completo:
<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/98/texact.htm>

¹² Para acceder al texto completo:
<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/15/texact.htm>



estratégicas que quedan en manos del capital privado nacional y/o transnacional.

El ejecutor de las masivas privatizaciones fue el ministro de Obras y Servicios Públicos José Roberto Dromi, quien en una ocasión expresó: "nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado". Algunas de las empresas privatizadas más emblemáticas fueron:

ENTEL: La Empresa Nacional de Telecomunicaciones fue creada en 1948 por el gobierno de Perón, llamada por aquel entonces "Teléfonos del Estado". A partir de la dictadura militar de 1976-1983 entró en un período de estancamiento que hizo decaer la calidad de los servicios y culminó con su privatización en 1990. Telecom Argentina y Telefónica de Argentina fueron las dos empresas que se apropiaron el mercado. Esta privatización la llevó adelante María Julia Alsogaray bajo sospechas de escandalosa corrupción. Los despidos y "retiros voluntarios" fueron masivos. Antes de la venta de la empresa se redujo el personal de 45.000 a 32.000.

Agua y Energía: Fue creada durante el primer gobierno de Perón en 1947 a partir de la fusión de diferentes organismos del Estado. Tuvo por misión la generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Esta empresa incorporó como novedad la construcción y operación de Centrales Hidroeléctricas y además desarrolló sistemas de Riego y uso de agua. Su ámbito de actuación fue el territorio nacional, su lema "Agua y Energía factor de progreso". Desarrolló todos los sistemas eléctricos intermedios de las diferentes regiones argentinas, tales como el NOA, NEA, Litoral, Centro, Cuyo, Comahue y Patagónica. En los años `70, construyó el Despacho Nacional de Cargas, ubicado en Rosario, que dirige en tiempo real todo el sistema eléctrico Nacional, asegurando la confiabilidad del mismo. En los años `80 construyó la Red Nacional de Interconexión de 500 kW, que vincula a todas las provincias argentinas. En 1979 por una resolución conjunta del Ministro de Economía, Martínez de Hoz y el Ministro del Interior, se transfirió la



distribución eléctrica a las provincias. A partir de la privatización en el año 1991-1992 algunos de estos grupos se transfirieron a la actividad privada -en más de 40 empresas- y muchos otros se perdieron. Funciones de planificación energética y de proyecto, aún 30 años después no fueron reemplazadas.

19

SEGBA: Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) fue una empresa pública argentina encargada de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Fue creada durante el gobierno del Dr. Frondizi, cuando se vencieron las concesiones a Empresas extranjeras, unificando la prestación del servicio eléctrico en la ciudad de Buenos Aires y los 14 partidos del conurbano. Fue privatizada entre 1991 y 1992. Se dividieron sus tareas y se crearon 7 empresas privadas nuevas: EDENOR, EDESUR y EDELAP fueron las más importantes. También fueron creadas las empresas Central Costanera, Central Puerto y Central Dock Sud.

Correo Oficial de la República Argentina: Correo Argentino fue una empresa pública argentina creada en 1972. Durante la última dictadura militar se permitió la actividad de empresas privadas en el servicio de correos y en 1992 fue convertida en la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA), constituyéndose en Sociedad Anónima. En 1997 ENCOTEL fue finalmente privatizada y pasó a ser propiedad del Grupo Macri. La Argentina fue uno de los primeros países del mundo en privatizar el servicio postal. Luego de años de incumplimientos del contrato de concesión del grupo Macri, a fines de 2003 volvió a manos del Estado.

YPF: Yacimientos Petrolíferos Fiscales, es símbolo sin duda de la pujanza y crecimiento económico que la Argentina tuvo durante el siglo XX. Proyectada y creada en 1922 por Hipólito Yrigoyen esta empresa argentina se dedicó a la exploración, explotación, destilación y venta del petróleo y sus productos derivados. En sus primeros años de vida ocupó un lugar central su director, el Gral. Mosconi, expandiendo la presencia de la empresa a diferentes



provincias del territorio argentino. YPF fue inclusive, impulsora de la fundación de nuevos pueblos y ciudades, tales como Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut, Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz o Plaza Huincul en Neuquén. Finalmente, fue privatizada al ser vendida a la española Repsol en 1999. En el año 2012 la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó su renacionalización, expropiándole a REPSOL las acciones por incumplimiento de los contratos.

Otras empresas privatizadas fueron: Administración General de Puertos AGP; Aerolíneas Argentinas S.E.; Área Material Córdoba Aviones; Banco Hipotecario Nacional; Caja Nacional de Ahorro y Seguro; Canal 11, Dicon Difusión S.A.; Canal 13, Río de la Plata S.A.; Empresa Líneas Marítimas Argentinas ELMA; Empresa Nacional de Telecomunicaciones; Establecimientos Altos Hornos; Fábrica Militar General San Martín; Fábrica Militar Pilar; Fábrica Militar San Francisco; Gas del Estado S.E.; Petropol; Petroquímica Bahía Blanca S.A.; Petroquímica General Mosconi; Petroquímica Río Tercero; Polisur Sociedad Mixta; Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires; Sociedad Mixta Siderurgia Argentina SOMISA; Hidroeléctrica Norpatagónica S.A.; Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A.; Interbaires S.A.; Intercargo S.A; Junta Nacional de Granos; Llao Holding; Monómetros Vinílicos; Talleres Navales Dársena Norte

Además, fueron concesionados los aeropuertos, Ferrocarril Belgrano S.A., Ferrocarriles Argentinos S.A., Ferrocarriles Metropolitanos S.A, Hipódromo Argentino, LR3 Radio Belgrano, LR5 Radio Excelsior, LV3 Radio Córdoba, Obras Sanitarias de la Nación y Yacimientos Carboníferos Fiscales (Y.C.F). El Astilleros y Fábricas Navales AFNE S.A. fue provincializado y el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) fue disuelto al igual que Carolina S.A. Minera, Consultara S.A. de la Armada; Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas, el Fondo Nacional de la Marina Mercante, la Junta Nacional de Carnes,



Tanque Argentino Mediano S.E. (TAMSE) y Tecnología Aeroespacial S.A. (TEA).

Como puede observarse, la política privatizadora afectó a todos los sectores: servicios, telecomunicaciones, producción, transporte, industria y también a las Fuerzas Armadas que se vieron fuertemente desfinanciadas. Las consecuencias no solo fueron económicas sino también sociales. En el caso de los ferrocarriles el impacto social fue inconmensurable. El cierre de los ramales no sólo implicaba la pérdida de puestos de trabajo sino el aislamiento y la condena de cientos de pueblos que quedan aislados sin ningún tipo de comunicación ni medios de vida. La Banda, Simbol, Loreto, Beltrán en Santiago del Estero, Laguna Paiva y San Cristóbal en Santa Fe, Navarro, Las Marianas en Buenos Aires, Pluma de Pato, Morillo en Formosa, Desiderio Tello, Carrizal, Patquía en La Rioja, fueron alguno de ellos.

Pero mientras tanto, la estabilidad macroeconómica alcanzada y el freno de la inflación, generaron el apoyo de gran parte del electorado, que se tradujo en la elección de convencionales constituyentes en 1994. Previo acuerdo con la UCR en lo que se denominó el "Pacto de Olivos": con la Reforma Constitucional Menem quedó habilitado para ser reelecto y en tanto el radicalismo obtenía la posibilidad de continuar con amplia representación parlamentaria al considerar que el escaño del tercer senador nacional correspondía a la minoría.

En julio de 1995 Menem asumió por segunda vez la presidencia. Pero liquidadas las empresas del estado, con un creciente desempleo, que en 1995 alcanza el 16,8 % de la población económicamente activa, causado por los despidos masivos del sector público, la disminución de la inversión pública, el cierre de pequeñas y medianas empresas, la protesta social comenzaría a aumentar.



Por otro lado, el modelo económico impuesto en la era neoliberal sólo podía funcionar en base al endeudamiento externo. El libre comercio había provocado un aumento notable de las importaciones (en 1991 eran de 8.276 millones de dólares y en 1999 de 24.103 millones de dólares), que generó un fuerte déficit en la balanza comercial. Si a esto le sumamos los giros al exterior por repatriación de utilidades (mecanismo por el cual las empresas multinacionales transfieren las ganancias a sus casas centrales) y el pago de los servicios la deuda, la única alternativa para que las cuentas cerraran era el constante endeudamiento externo. Ni siquiera los cuantiosos ingresos generados por la venta de las empresas públicas equilibran las balanzas públicas.

Por eso, entre 1989 y 1999 se toma una deuda equivalente a un promedio de 6.000 millones por año. La deuda externa, además de los problemas económicos, provocó una fuerte dependencia política hacia los órganos acreedores –principalmente el FMI-, que se adjudicaron la potestad de monitorear las políticas aplicadas y las medidas que entendían como necesarias para garantizar los pagos a término.

En forma directamente proporcional aumentó la deuda y la pobreza e indigencia. Hacia el final del segundo gobierno de Menem contaba el 26 % de la población argentina se encontraba bajo la línea de pobreza y el 6,7 % en la indigencia.

10.2.1 La política exterior menemista: el realismo periférico

En el ámbito de las relaciones internacionales, la política menemista se caracterizó por el alineamiento con los EE.UU. Con respecto al reclamo soberano por las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Cavallo siendo Canciller- retomó las negociaciones con el Reino Unido y se formaron los Acuerdos de Madrid, en 1990, mediante los cuales la Argentina aceptó que los habitantes de las



Islas pudieran otorgar permisos de pesca en zona de conflicto. A partir de un discurso “no confrontativo” y cooperativo donde la condición para avanzar en estos acuerdos, era no abordar ni discutir la cuestión de la soberanía de las Islas. Como resultado del acuerdo, los 1995 los kelpers concedieron 12 contratos de las 19 áreas en licitación a la que se presentaron cerca de medio centenar de compañías. El único consorcio excluido fue el de YPF junto a British Gas. Cuando Di Tella asumió como Canciller se profundizó esta política de “cooperación” intentando tender puentes con los isleños a partir de la denominada “política de seducción”. Por ejemplo, para la Navidad el Canciller adoptó como costumbre enviar a todas las familias isleñas un obsequio, en 1998 las 600 familias malvinenses recibieron un libro de Winnie Pooh dedicado con las siguientes palabras: “Mi querido vecino: estas historias, llenas de calor, simplicidad e ingenio, pueden ayudar a construir un sentido de familia entre nosotros, canciller Guido Di Tella”.

Por otro lado, durante el primer gobierno de Menem se concretó la creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que había comenzado bajo el gobierno de Alfonsín. En 1985, se firmó el Acta de Iguazú entre Argentina y Brasil y, en junio de 1986, el Acta para la Integración Argentino-Brasileña. En noviembre de 1988 se suscribió el tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo, tomando como ejemplo la integración de Francia - Alemania, y Estados Unidos - Canadá. Este tratado estableció que la democracia es necesidad ineludible para el desarrollo y la integración. También propuso la creación de un espacio económico común y la integración intrasectorial entre ambos países, con un programa gradual y flexible. Mostró a su vez, la voluntad de que éste fuera el inicio de un proceso integrador latinoamericano, para fortalecer la posición de la región en el mundo. El acuerdo, contemplaba el análisis de cada una de las potencialidades de los países en cuestión, que deberían tenerse en cuenta para alcanzar un desarrollo efectivo y parejo en diferentes áreas: alimentos, bienes de capital y empresas binacionales, energía,



biotecnología, tecnología nuclear, cooperación aeronáutica, industria automotriz y la moneda. El objetivo final del tratado era lograr la conformación de un mercado común, sin barreras arancelarias.

Finalmente, en 1991, esta iniciativa se concretó con la firma del Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, quedando constituido el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). No obstante, el objetivo propuesto por el acuerdo Alfonsín-Sarney de constituir una unión aduanera, fue desechado para dar lugar a simple acuerdo comerciales en función de las políticas neoliberales de la época. No incluyó temas fundamentales para la integración como la reconversión estructural, los mecanismos de fomento económico, el rol de la representación parlamentaria y las condiciones o movilidad del factor trabajo. Sin embargo, constituyó un espacio desde el cual, cuando emergieron fuerzas políticas que cuestionaron al neoliberalismo, pudieron convertirlo en instrumento de una integración no sólo económica, sino también política y social.

10.2.2 La resistencia popular en los años '90

El movimiento obrero fue el sector más golpeado por las políticas neoliberales. La desindustrialización fue un ataque directo a las organizaciones sindicales. A su vez, la represión que se impuso desde 1976, si bien recayó sobre todo el campo nacional y popular, la sufrió fundamentalmente su “columna vertebral”.

Al asumir Menem y llevar adelante las privatizaciones de las empresas públicas, los trabajadores intentaron resistir la maniobra, lo que les valió la represión y que muchos fueran cesanteados por defender las empresas del Estado. Pero el menemismo llevó adelante una política de seducción y cooptación de la dirigencia sindical. El hecho de que algunos sindicalistas -incluso con una historia de resistencia- claudicaran en las luchas perjudicó y desprestigió al conjunto del movimiento obrero.



En este contexto, el 10 y 11 de octubre de 1989 se produjo una nueva ruptura en el Congreso de la CGT, surgieron la CGT Azopardo (Ubalдини apoyado por ATE, UTA, CTERA, Judiciales, telefónicos, etc., con cauto apoyo de la UOM liderada por Lorenzo Miguel) y la CGT San Martín (Barrionuevo de Gastronómicos, West Ocampo de Sanidad, Gerardo Martínez de la UOCRA, Zanola de Bancarios).

En 1991, la fracción del movimiento obrero opositora al gobierno se presentó en las elecciones a gobernador en la provincia de Buenos Aires con lista propia. Saúl Ubalдини –con el apoyo de Hugo Moyano y Héctor Recalde– obtuvo tan sólo con el 2% de los votos.

En tanto, En 1992 se produjo un hecho inédito en la historia de los gobiernos peronistas: las paritarias quedaron suspendidas. Un conjunto de dirigentes sindicales (Germán Abdala, Víctor de Gennaro, Mary Sánchez, entre otros) constituyeron una nueva central obrera, el Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA) y publicaron un documento en el cual, entre otras cosas, proponían autonomía sindical con respecto al Estado, los patrones y los partidos políticos; democracia sindical, rechazando las estériles divisiones y el sectarismo; apertura a otras organizaciones sociales que expresen las demandas de los sectores populares; y revalorización de la ética gremial atacando la corrupción y el pseudo-pragmatismo con el que dirigencias caducas terminan legitimando el ajuste. Esta nueva central planteó, en aquellas condiciones, no solo la necesidad de combatir el burocratismo y la complicidad de ciertos dirigentes con el menemismo, sino también la búsqueda de alternativas gremiales para grandes sectores de la sociedad que se encontraban trabajando en la informalidad o desocupados.

La resistencia de estos sectores del movimiento obrero –la CTA y la CGT Azopardo- evitó la sanción del denominado “Proyecto de Reforma Laboral”. Sin embargo, no pudieron frenar el avance del gobierno contra muchos de los derechos de los trabajadores: se



prohibieron las huelgas en los servicios públicos, se redujeron los aportes patronales entre el 30 % y 80 % y se sancionó la nueva Ley de Empleos que precarizó el trabajo y la Ley de Accidentes de Trabajo que impuso topes indemnizatorios. La obra se completó con la privatización del sistema previsional y la creación de las AFJP.

En 1994, se produjo la confluencia de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (COSITMECOS) liderada por Néstor Cantariño, con Juan Manuel Palacios, el líder colectivo de la UGTT, quienes desconocen al Consejo Directivo de la CGT y sin abandonar la central, se proponen crear un nuevo nucleamiento combativo. El 1 de febrero de 1994, resultado de un congreso el 27 de enero en la sede central de Unión Tranviarios Automotor, se fundó el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA). En el documento inicial redactado por Ubaldini, Moyano y Palacios convocaron a “intensificar la defensa de los intereses de los trabajadores” sosteniendo la “independencia de cualquier poder político, en virtud de que solamente la lucha del trabajador salvará al trabajador” y enfatizando el “rechazo total a la ley de flexibilización laboral” y convocando “a todos los sectores comprometidos con los intereses nacionales” para implementar “métodos de lucha que incluyan asambleas, paros y movilizaciones regionales”.

Se organizaron mediante una conducción flexible integrada por Manuel Palacios (UTA), Hugo Moyano (UGTT), Enrique Marano (FATIDA), Horacio Mujica (ADEF), Carlos Barbeito (UOMA), Ángel García (SUTCA) y Saúl Ubaldini (FATCA). A pesar de las diferencias en cuanto a la concepción de una central única, este movimiento coincidió en acciones de lucha con la CTA, formando el frente opositor más fuerte contra el menemato.

En forma simultánea, surgieron las organizaciones piqueteras: trabajadores desocupados que no podían luchar en el sindicato como antaño y que encontraron en el territorio (rutas o caminos urbanos) un nuevo lugar de resistencia. Estas



organizaciones fueron parte de los nuevos movimientos sociales que emergieron en el marco de la aplicación del neoliberalismo. Frente a la reestructuración productiva y la reforma del Estado, las luchas sociales adquieren un aspecto diferente ante la exacerbación de las desigualdades sociales, el crecimiento de la desocupación, la marginalidad y el retroceso del Estado en ciertas áreas. Surgieron así los movimientos sociales. Antes de la arremetida neoliberal, el descontento social se expresaba casi exclusivamente en huelgas o boicots realizados por trabajadores que estaban integrados en la economía formal; era el movimiento obrero el que actuaba a través de la lucha sindical. Aunque estas expresiones no hayan desaparecido, el hecho de que existan sectores cada vez más importantes de la población por fuera de los límites del campo laboral provocó el surgimiento de nuevas formas de acción política, alejadas de aquellas que prevalecieron hasta los '70, cuando la organización apuntaba a una lucha por el acceso al Estado.

Los movimientos sociales cuentan con algunas características comunes. Algunas de ellas son: 1) territorialización en nuevos espacios que reemplazan a aquellos que entraron en crisis como forma aglutinadora (la fábrica, por ejemplo); 2) buscan construir una autonomía material y simbólica, tanto del Estado como de los partidos políticos; 3) apuntan a revalorizar formas identitarias y culturales que exceden la noción de ciudadanía (la identidad étnica en algunos casos); 4) tienen la posibilidad de generar sus propios intelectuales y dirigentes, haciéndose cargo de la educación por sí mismos; 5) otorgan un papel fundamental a las mujeres; y 6) generan nuevas formas de organización del trabajo.

Sin embargo, no que los movimientos sociales constituyeron una ruptura total con el pasado, pues para poder comprenderlos no basta sólo recurrir al momento de aplicación de las medidas neoliberales, sino que es necesario integrarlos a la tradición de lucha por reclamos históricos no resueltos como puede ser la cuestión de la tierra. Es decir, en lugar de abordarlos en las formas específicas



en que llevan adelante la lucha, es necesario integrarlos en un proceso revolucionario de larga duración y en la recuperación de viejos reclamos bajo nuevos contextos. Los movimientos sociales nacieron entonces como un actor nuevo que emergió de las novedades socio-económicas y políticas que la realidad plantea bajo el neoliberalismo.

En este contexto, la CGT, la CTA y los movimientos sociales, confluyeron en acciones comunes entre las que se destacó la Marcha Federal en 1994 convocada en respuesta de la firma del Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social por parte de la CGT oficialista. En la Marcha participaron el MTA y la CTA, la Corriente Clasista y Combativa y la Federación Agraria. Casi 80.000 personas escucharon, entre otros, a Moyano, De Gennaro, el “Perro” Santillán y Volando.

Pero gran parte del movimiento obrero continuaba su alianza con el menemismo. En 1995 impulsaron la reelección formando el Movimiento Político Sindical Menem 95 (Barrionuevo, Lescano, etc.) y el Bloque Político Sindical 17 de Octubre (UOM, Municipales, UOCRA, etc.); en cambio, el MTA y la CTA apoyaron la candidatura Bordón – Álvarez.

A partir de 1995 aumentó el nivel de conflictividad social: cortes de rutas, manifestaciones, protestas callejeras. La represión no se hizo esperar: fue asesinado un trabajador en Ushuaia; y se reprimieron cortes de ruta en Tartagal y Gral. Mosconi realizados como consecuencia del despido de trabajadores por la privatización de YPF. A su vez, se llevaron adelante varios paros generales convocados por el MTA y la CTA. Entre el 9 y 11 de julio se realizó la Marcha Nacional por el Trabajo, convocada por el MTA, la CTA, la CCC y la Federación Universitaria Argentina (FUA), contra un acuerdo firmado por la CGT oficial con el gobierno.

El 14 de agosto de 1997 se produjo la única huelga general de ese año convocada por el MTA, la CTA, la CCC y la UOM (a



pesar de estar adherida a la CGT oficial); y en el mismo año, CTERA (docentes) instaló frente al Congreso de la Nación una Carpa Blanca donde se llevaron a cabo ayunos en protesta a la destrucción de la educación pública acontecida a partir de la sanción de la Reforma educativa (Ley Federal de Educación y Ley de Transferencia).

En 1997 fue asesinada Teresa Rodríguez, en una represión contra un corte de la ruta en Cutral Có, causado por un fuerte recorte salarial. La Marcha Nacional por el Trabajo fue convocada por el MTA, la CTA, la CCC y la Federación Universitaria Argentina (FUA), contra un acuerdo firmado por la CGT oficial con el gobierno.

Las luchas se sucedieron con diferentes modalidades: paros, movilizaciones, piquetes, apagones, etc. hasta que, en 1999, ganó las elecciones al gobierno la Alianza formada por el Frente Grande y la UCR. La presencia de sectores progresistas en la Alianza victoriosa, generaba -en algunos grupos- expectativas de un futuro promisorio. Pronto quedaría claro que lejos de generar un cambio, se profundizaría la política liberal, causando el estallido del año 2001.

10.2.3 La lucha en las calles: el gobierno de la Alianza y la crisis del 2001

Más de 20 años de políticas neoliberales habían logrado destruir las bases de una sociedad industrializada, sin fuertes desequilibrios sociales. Luego de imponerse en las elecciones obteniendo el 48,5% de los votos, asumió el 10 de diciembre de 1999, con el 26,7 % de la población por debajo de la línea de pobreza y el 6,7 % en la indigencia. La brecha entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre era de 24 veces. La deuda externa -pública y privada-, por su parte era de 200.000 millones de dólares. En vez de generar un cambio de rumbo, el gobierno de la Alianza sostuvo que



se debía “honrar la deuda” aún a costa del hambre del pueblo argentino.

A los tres días se la asunción dio una muestra de lo que se avecinaría: en una movilización de estatales correntinos, que cortaban el puente que une dicha provincia con Resistencia, la represión dejó un saldo de dos muertos.

En el año 2000, bajo el gobierno de la Alianza, se produjo la división institucional de la CGT quedando conformadas la “CGT Oficial” con Rodolfo Daer (alimentación) y la “CGT Disidente” conducida por Hugo Moyano (camioneros). Ese mismo año, se aprobó la Ley de Flexibilización Laboral impulsada por el Ministro de Trabajo Flamarique mientras que se realizaba una movilización nocturna el 26 de abril –brutalmente reprimida– convocada por la CTA y la CGT disidente que denunciaban las coimas en el Congreso Nacional. Conocida luego como “ley banelco”, esto envuelta en un escándalo de corrupción que terminó con la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez y la retirada del Frepaso del gobierno nacional en octubre del año 2000.

Las organizaciones sociales y sindicales en tanto, aumentaron las acciones de luchas: manifestaciones contra el FMI, llamado a la desobediencia fiscal, paro general, fueron algunas de las estrategias utilizadas. Algunos sectores de la Iglesia católica se sumaron a las protestas, organizando la “Navidad Solidaria” en diciembre del 2000 en la Plaza de Mayo. La represión recrudesció y murió otro trabajador en Tartagal, provincia de Salta.

En tanto, el Ministro de economía Machinea, hombre de las grandes empresas tales como el grupo Techint, propuso realizar un ajuste fiscal para evitar una caída en default y a finales del año 2000 llevó adelante el “Blindaje”, en el cual negoció con el FMI la llegada de más de 37 millones de dólares provenientes de aportes del mismo FMI, de otros organismos internacionales, de bancos locales y del gobierno español, con un interés del 8 % anual. Fue presentado por



el gobierno como el inicio del despegue de la economía argentina. Sin embargo, los fondos fueron destinados a pagar deudas anteriores, buscando generar condiciones de confianza para la inversión privada. Para conseguir este acuerdo el FMI impuso algunas condiciones: el congelamiento del gasto público primario a nivel nacional y provincial por cinco años, la reducción del déficit fiscal y la reforma del sistema previsional, para elevar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres.

En mayo del año 2001 asumió la cartera de economía Ricardo López Murphy, un liberal ortodoxo que anunció recortes en el campo de la salud y de la educación –proponiendo inclusive arancelar la universidad pública-, lo que generó fuerte rechazo de propios y ajenos. De la Rúa, acorralado por la situación económica decidió convocar a quien había propuesto la convertibilidad, Domingo Cavallo, quien se hizo cargo una vez más del Ministerio de economía. Llevó adelante una política de ajuste que implicó la disminución de los salarios públicos y de las jubilaciones a partir de la sanción de la “Ley déficit cero”. Además, realizó el denominado megacanje que consistió en desplazar el vencimiento de pagos por un total de 50.000 millones de dólares por el lapso de 3 años. Se corrían así los plazos de pago a cambio de la aplicación de un interés del 7%.

Pero las medidas ortodoxas no brindaron soluciones para los profundos problemas sociales que acechaban a la sociedad argentina: equilibrar las cuentas y salvar el sistema financiero, no resolvía la desocupación y pobreza que aumentaban en forma vertiginosa.

La movilización social continuó y se profundizó en 2001. Los piquetes se extendieron, desarrollándose no sólo en las rutas sino también en las grandes ciudades. En el partido de La Matanza, por dar un ejemplo, el Frente Tierra y vivienda (FTV) -liderado por Luis D'Elía- llevó adelante 18 días consecutivos de cortes.



En agosto, la CTA realizó un paro en apoyo a los piqueteros y el 29 del mismo mes ambas CGT convocaron a un paro en conjunto. El 13 de diciembre, se realizó un nuevo paro general con adhesión de todas las organizaciones antes mencionadas (incluido Daer) y precedido el día anterior por movilizaciones de la CGT disidente y de la CTA.

Por otro lado, se constituyó el Frente Nacional Contra la Pobreza (FRENAPO). Una de las iniciativas de este espacio integrado por diferentes organizaciones sociales, religiosas, sindicales, fue realizar una consulta popular en apoyo a un programa integral en contra la pobreza y a favor de la distribución de la riqueza. El mismo incluía, por ejemplo, el establecimiento de la asignación universal por hijo. En las calles se colocaron mesas de votación en las cuales participaron más de tres millones de ciudadanos/as diciendo “no a la pobreza”. La consulta se realizó el 13, 14 y 15 de diciembre del 2001, apenas días antes del estallido social que terminaría con el gobierno de De la Rúa.

10.2.4 La crisis del modelo neoliberal

Diciembre de 2001. La desocupación ascendió al 19% mientras que el PBI decreció un 4,4%. En este marco, el anuncio de Cavallo de la aplicación del “corralito”, es decir la limitación para retirar moneda extranjera, generó fuerte malestar en parte de la población, en particular en los sectores medios quienes se expresaron mediante los llamados “cacerolazos”; mientras tanto, en los lugares más pobres de las grandes ciudades se desencadenó una ola de saqueos a supermercados. “Piquete y cacerola, la lucha es una sola”, sintetiza el frente popular que se conforma en aquellos días¹³. Frente a este contexto, el Presidente decretó Estado de Sitio.

¹³ Existen trabajos que sistematizan y cuantifican las acciones de la clase trabajadora en las calles. Véase Iñigo Carrera, Nicolás (2008-2009): “Indicadores para la periodización (momentos de ascenso y descenso) en la lucha de la clase obrera: la huelga general. Argentina, 1992-2002”; en PIMSA. Documentos y Comunicaciones.



Las calles de Buenos Aires se vieron rebasadas con manifestantes que no estaban dispuestos a aceptar la política represiva del gobierno. En la pueblada del 19 a la noche, confluyeron sectores profesionales, trabajadores/as, trabajadores/as desocupados, pequeños comerciantes, estudiantes. 39 muertos y la huida en helicóptero del Presidente de la Casa de gobierno fue el saldo de estas jornadas.

El abandono de la Casa Rosada del helicóptero que llevaba al Presidente De la Rúa, marcó un final de época. El país quedó subsumido en una profunda crisis política. Por la ausencia del Vicepresidente –producida por la renuncia de Chacho Álvarez tiempo antes motivada por el escándalo de las coimas en el Congreso de la Nación- asumió en forma transitoria el Presidente de la Cámara de Senadores, Ramón Puerta quien convocó a la Asamblea Legislativa para definir quién ocuparía la primera magistratura. La elección recayó sobre gobernador de la Provincia de San Luis, Rodolfo Rodríguez Saá.

En los siete días que duró su gobierno se tomaron medidas de diferente índole. En primer lugar, declaró el default de la deuda argentina; por otro lado, bajó el salario del Presidente a \$ 3000 y determinó que ningún funcionario podía ganar más que esto; y, por primera vez en la historia argentina, las Madres de Plaza de Mayo fueron recibidas en la Casa Rosada. En el plano económico proponía la creación de una moneda paralela denominada “argentino”.

En este convulsionado clima, el ejecutivo convocó a una cumbre de gobernadores en Chapadmalal intentando buscar apoyos políticos, a la cual sólo asistieron tres. Rodríguez Saá debió renunciar. Por línea sucesoria asumió el Presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño quien volvió a convocar a la Asamblea Legislativa quien designó como Presidente de la República a Eduardo Duhalde, en ese momento Senador Nacional. Así, con 5 presidentes en menos de 10 días, el 2 de enero del 2002 asumió Duhalde con el objetivo de completar el mandato hasta el año 2003.